

de la Constitución, además de este artículo se infringieron el 13 y 14 de la misma; y con fundamento de la ley de 20 de Enero de 1869, se decretó que es de confirmarse y se confirma la sentencia pronunciada por el Juez de Distrito de Guanajuato que declaró que la Justicia de la Unión ampara y protege á Secundino Mena, contra los procedimientos del Gefe político de Salamanca, por los cuales fué juzgado y sentenciado como ladrón en gavilla.—Devuélvanse los autos al juzgado de su origen, con copia certificada de esta sentencia; publíquese y archívese á su vez el Toca. Así por mayoría de votos lo decretaron los CC. Presidente y Ministros que formaron el Tribunal pleno de la Corte Suprema de Justicia de los Estados Unidos Mexicanos, y firmaron.—*José M. Iglesias.*—*Pedro Ogazon.*—*Juan J. de la Garza.*—*José María Lozano.*—*Pedro Orlaz.*—*M. de Castañeda y Nájera.*—*J. M. del Castillo Velasco.*—*M. Auza.*—*S. Guzman.*—*L. Velasquez.*—*Ignacio M. Altamirano.*—*Luis María Aguilar*, secretario.

Es copia que certifico. México, Octubre 15 de 1873.—*Lic. Enrique Landa*, oficial mayor.

AMPARO

Promovido ante el Juzgado de Distrito de Puebla, por el C. Lic. Sebastian Villegas, contra el Tribunal Supremo del Estado, por la resolución que dictó en el recurso fuerza de grado que interpuso el C. Rafael Perez.

PEDIMENTO DEL C. PROMOTOR FISCAL.

C. Juez de Distrito.

El Promotor fiscal en el juicio de amparo promovido por el C. Lic. Sebastian Villegas, contra el Tribunal Supremo del Estado por la resolución que dictó en el re-

curso fuerza de grado que interpuso el C. Rafael Perez, supuesto su estado que es el de alegar, ante V. dice que el motivo que ha dado mérito al C. Lic. Villegas para solicitar el amparo de los Tribunales federales, consiste en que habiendo sido condenado el C. Perez por juez competente á pagar las costas causadas legalmente en el juicio que contra él siguió D^a Rafaela Rosas como fiador del C. Miguel Calderon, el Tribunal Supremo determinó sin facultades para ello y contra ley expresa, que las costas que pertenecían al quejoso por haber sido patrono de la demandante, se redujeran á la mitad del interés principal del pleito, cuando por derecho le correspondía una cantidad superior. Dice que tal determinación importa la violación de las garantías que á todo hombre otorga la Constitución general en sus artículos 49, primer período del 59, tercer período del 17 y el 29 del 14.

El que suscribe, para el perfecto esclarecimiento de los hechos, suplicó al Juzgado pidiera al Tribunal Supremo y al C. Mariano Sanchez, Juez 39 menor de paz, los expedientes relativos al recurso fuerza de grado y al juicio verbal seguido entre la Rosas y Perez, á fin de que con vista de ellos fallara lo conveniente.

Venidos estos expedientes y examinados con la debida detención, se vé en el primero, que en efecto el Tribunal Supremo, con formándose con el pedimento del C. Procurador general, decretó que se declaraba procedente el recurso fuerza de grado interpuesto por el C. Rafael Perez; que se previniera al Juez infractor suspendiera sus procedimientos referentes á la exacción de costas, y que en este particular se le previniera también se ajustara á la ley, haciendo que Perez, responsable al pago de costas, lo hiciera, exhibiendo por todos derechos la mitad del valor del pleito.

En el otro expediente se observa, que concluido el juicio, después de repetidas articulaciones promovidas por Perez, se condenó al pago de todas las costas, las que

tasadas por el C. Lic. Ibarra, ascendieren á favor del C. Villegas como abogado de la Rosas, á la cantidad de cuarenta y nueve pesos, setenta y cinco centavos.

Ahora bien, C. Juez, ¿los derechos adquiridos por el C. Lic. Villegas para percibir la suma expresada, en virtud de sentencia que pronunció el Juez del negocio, fueron hollados con la resolución del Tribunal Supremo, que la redujo á cinco pesos y pico de reales, que importa la mitad del valor del pleito? ¿Y estos derechos hollados son la violación flagrante de los artículos constitucionales que invoca en su escrito de queja el ya varias veces mencionado C. Lic. Villegas? A juicio del Promotor, sí fueron hollados los derechos de éste y violada la garantía que le otorga el artículo 14 de la Constitución. Pasa pues, á explicarse, aunque con la brevedad que lo permiten las muchas atenciones de su ministerio.

Es inconcuso que el decreto de que se valió el Tribunal Supremo para reducir las costas devengadas por el C. Lic. Villegas, no es aplicable al resultado del juicio verbal concluido entre la Rosas y Perez, porque éste y no la Rosas fué el que salió condenado á pagar todas las costas, y las legales fueron las reguladas por el C. Ibarra.

Si dicha Sra. Rosas hubiera sido la sentenciada á cubrirla, razón habría para que se rehusara á pagar los cuarenta y tantos pesos que demanda su abogado, por importar el interés del pleito diez pesos y pico de reales; pero cuando lo fué su contraparte, no hay justicia para que esa regulación se varíe en perjuicio del quejoso.

En efecto, no hay mas que leer el art. 49 del decreto de 5 de Diciembre de 1870, para persuadirse de la verdad que he indicado; él dice: se derogan las leyes que prohíben el pacto llamado de cuota litis, quedando por tanto en libertad los abogados y sus clientes, (no habla de las partes contrarias) para el ajuste de sus honorarios, sin

que nunca puedan pasar de la mitad de lo que importe el litigio. No mediando ese pacto (entre el abogado y su cliente) la tasación de honorarios se hará conforme al arancel vigente, y ni aun en este caso, de que no haya pacto entre el cliente y su abogado, podrán exceder los honorarios que tenga que pagar el cliente á su abogado, de la mitad del interés que se verse.

Palpablemente se está mirando, que los dos casos de que habla este artículo se refieren al abogado y su cliente, no al contrario, y no puede ser de otra manera, porque si esa garantía tuvieran los litigantes de mala fé, eternizarían los pleitos contra lo dispuesto en multitud de leyes tanto antiguas como modernas y harían ilusorios los derechos legítimos de las partes interesadas.

Creo C. Juez, que este es el sentido material y genuino del artículo; el darle otro sería prostituir todo negocio que se ventilara ante los Tribunales del Estado, y meterse á aclarar una cosa que no está oscura ni dudosa contra las reglas prescritas para la interpretación.

Así pues, las prevenciones de que me vengo ocupando, en el caso de la Rosas y Perez, hacen referencia á la Rosas y solo á ella favorecen, no á Perez en ningún sentido. Si á éste se quieren hacer extensivas, se le dá una aplicación mala al decreto de 5 de Diciembre de 1870, infringiéndose desde luego el artículo 14 constitucional, que previene: "que nadie puede ser juzgado ni sentenciado sino por leyes dadas con anterioridad al hecho y *exactamente aplicadas á él* por el Tribunal que previamente haya establecido la ley.

Supuesto el hecho innegable de la resolución del Tribunal Supremo, de que se queja el C. Lic. Villegas, lo espuesto bastaría para que se le otorgara el amparo que solicita; mas hay que tener presente lo que manifiesta en su alegato, con respecto á la violación de los artículos 49, 59 y 17, y á cuanto mas dice el Tribunal Supremo en su informe, que convence de que tambien

esas garantías están violadas en su perjuicio.

Por esas razones, que acepta el que suscribe, y por lo que lleva expresado en este escrito, pide á V. se sirva deferir á la pretension del ya muchas veces repetido C. Lic. Sebastian Villegas, en conformidad con lo que dispone la ley de 20 de Enero de 1869.—Zaragoza, Julio 14 de 1873.—*Eugenio Sanchez.*

Sentencia del C. Juez de Distrito.

Puebla, Agosto 2 de 1873.—Visto este juicio de amparo promovido por el Lic. Sebastian Villegas contra el Tribunal Supremo del Estado, por haber violado en perjuicio de su persona las garantías individuales que la Constitucion de la República otorga al hombre en los artículos 4º y 5º y tercer periodo del artículo 17, con el hecho de haber dádole entrada al recurso fuerza de grado en el juicio verbal que promovió Dª Rafaela Rosas, bajo su patrocinio, contra el C. Rafael Perez como fiador del C. Miguel Calderon, sobre pago de la cantidad de diez pesos renta de casa y desocupacion; el escrito de queja; el informe de la autoridad responsable; el parecer fiscal; las pruebas rendidas; lo alegado, y cuanto mas que ha sido de verse y tenerse presente.

Considerando; primero: que el quejoso ha hecho valer para que se le otorgase el amparo de la Justicia federal, en que teniendo devengada la cantidad de cuarenta y nueve pesos setenta y cinco centavos, patrocinando á Dª Rafaela Rosas en el juicio que sobre pago de la cantidad de diez pesos renta de casa y desocupacion, siguió contra el C. Rafael Perez, habiendo sido sentenciado este al pago de todas las costas, interpuso el recurso fuerza de grado el cual le fué admitido; y resuelto por el Tribunal Supremo que suspendiera el Juez sus procedimientos en cuanto á la exaccion de cos-

tas, lo cual importa violacion en su perjuicio de la garantía individual que otorga el tercer periodo del artículo 17 de la Constitucion, por que se contraria el precepto de que los Tribunales estarán siempre expeditos para administrar justicia, puesto que se le impide al Juez ejecutar una sentencia en el punto de sus honorarios: que por identidad de razon se han violado las garantías que concede el artículo 4º, pues por ese medio se le prohíbe el ejercicio de su profesion siendo útil y honesta, y mas que todo el aprovechamiento de sus productos, cuando ni uno ni otro se le puede impedir sino por sentencia judicial, y no de un recurso; así como tambien ha violádose la garantía que le concede el artículo 5º, por que al prevenirle al Juez de paz que se ajuste á la ley del Estado de 5 de Diciembre de 1870, si fuese en el sentido que ha querido dársele, de que el responsable al pago de costas lo haga exhibiendo por todos derechos la mitad del valor del pleito, resultaría que debiera recibir cinco pesos por mas de catorce meses de trabajos personales, lo cual es contrario al artículo constitucional.

Segundo: que estando dispuesto en el Estado por ley de 5 de Diciembre de 1870, que tengan libertad los abogados de ajustar con sus clientes lo que deban entregárles por honorarios en los negocios que les encomienden, sin que el importe nunca pueda pasar de la mitad del interes del pleito, y de no mediar ese pacto, la tasacion la haga conforme al arancel vigente, no pudiendo aun en éste caso, exceder de la mitad del interes que se verse, y que por lo mismo al encargarse el abogado de un negocio, sabe cuales son las obligaciones de los litigantes en cuanto á costas; y si al cliente solo pueda exijirse ya sea la cantidad pactada ó lo que resulte de la tasacion con arreglo al arancel de 840, pero sin que en uno ni en otro caso deba pagar mayor suma que la mitad del importe del interes que se verse; es fuera de duda que á la parte contraria no pueda exijirse mayor cantidad

que esa mitad, si se lo condena al pago de todas las costas, pues la circunstancia de que con ella no hubo ajuste, solo podrá dar méritos para hacerse la regulacion conforme al arancel, mas sin ceder de la tasativa que pone la ley.

Tercero: que el quejoso ha debido saber cual era la cantidad que solo podria percibir conforme á la ley cualesquiera que fuesen sus trabajos, supuesto que nunca podria recibir mayor suma que la mitad del importe del negocio, y tuvo libertad para aceptarlo ó nó; así es que al haberse encargado de él, es visto que ni puede decirse obligado á prestar trabajo sin remuneracion, ni que se le impida el ejercicio de su profesion ó el aprovechamiento de sus productos, y por lo tanto le favorezcan los artículos 4º y 5º de la Constitucion.

Cuarto: que por lo que hace á lo que se establece por el tercer periodo del artículo 17, tampoco es aplicable al caso, pues que el Tribunal Supremo no impidió al Juez que administrara justicia, sino que lo hiciera separándose de lo prevenido por la ley. Por cuyas consideraciones y en atencion ademas, á lo prevenido por los artículos 8º y 17 de la ley de 20 de Enero de 1869,

Se declara: que la Justicia de la Union no ampara ni protege al C. Lic. Sebastian Villegas contra el Tribunal Supremo del Estado, por haber resuelto en el recurso fuerza de grado, interpuesto en el negocio que patrocinó contra el C. Rafael Perez, sobre pago de renta y desocupacion de casa; que el Juez de paz solo hiciera efectiva su sentencia en cuanto al pago de costas, conforme á la ley de 5 de Diciembre de 1870 del Estado; y que deberá pagar el quejoso la cantidad de cien pesos de multa á que se lo condena, cuya suma entregará en la Jefatura superior de Hacienda.

Hágase saber; remítanse las actuaciones á la Corte Suprema de Justicia para la revision de los procedimientos, y copias de este fallo á la direccion del Semanario Judicial y Periódico Oficial del Estado, para su

TOMO V.—PARTE II.

publicacion. El C. Juez de Distrito definitivamente juzgando, lo proveyó, mandó y firmó.—*Antonio Rivera.*—Ante mí.—*Antonio García Mozqueira.*

Es copia que certifico para su insercion en el Semanario Judicial de la Federacion, en cumplimiento de lo mandado.

Puebla, Agosto 7 de 1873.—*Antonio G. Mozqueira.*

Ejecutoria de la Suprema Corte de Justicia.

México, 3 de Octubre de 1873.—Visto el juicio de amparo promovido ante el Juzgado de Distrito de Puebla por el Lic. Sebastian Villegas, contra la resolucion del Tribunal Supremo del Estado, que declaró procedente el recurso judicial denominado “fuerza de grado” interpuesto por D. Rafael Perez contra el Juez 3º menor de paz, por haberlo condenado al pago indebido de cuarenta y nueve pesos setenta y cinco centavos de costas, en el juicio que sobre pago de renta y desocupacion de casa seguia en su contra Dª Rafaela Rosas patrocinada por el Lic. Villegas, mandando ademas dicho Tribunal, se previniese al Juez de paz suspendiera sus procedimientos referentes á la exaccion de costas, y se sujetaran á la ley, no exigiendo al responsable al pago, por todos derechos, mas que la mitad del valor del pleito, que en el caso en cuestion era de diez pesos cincuenta centavos, todo conforme á la ley particular del Estado de 5 de Diciembre de 1870, que prohíbe que los honorarios de los abogados puedan exceder de la mitad del interes del pleito, pues que dichos cuarenta y nueve pesos eran exigidos con este título á D. Rafael Perez como devengados por el abogado de la parte contraria. Con cuyas providencias cree el quejoso que se han violado en su persona las garantías que otorga la Constitucion federal en sus artículos 4º, 5º, 14 y 17, porque con ellas se le impide el libre ejercicio de su profesion, y

se le quita el derecho de exigir la justa remuneracion de sus servicios por un Tribunal que carecia de facultad para ello, así como para poner trabas á la expedita administracion de justicia, mandando suspender el pago de sus honorarios.

Considerando: que si bien los poderes públicos tanto de la Federacion como de los Estados, no están autorizados para impedir el ejercicio de una profesion honesta ni para restringir la libertad de estipular la justa remuneracion de los servicios prestados, sí tienen plena facultad para determinar en caso de omision por parte de los contratantes, la estension de las prestaciones á que se deben suponer haber consentido en obligarse por el hecho mismo de su silencio, así como tambien para fijar la cantidad hasta que puede ser condenado á satisfacer por gastos á la parte contraria el litigante temerario.

Que por la decision del Tribunal del Estado no se declara lo que debe pagar D^a Rafaela Rosas como honorarios á su patrono el Lic. Villegas, sino lo que como por haber litigado con temeridad, está obligado D. Rafael Perez á resarcir á dicha Señora.

Que como lo declara el informe, fojas 15 vuelta, del Procurador general del Estado, al que dió su aprobacion el Tribunal para ser presentado en este juicio, el Lic. Villegas no ha perdido su accion, expedita para demandar á su cliente los honorarios que crea haber devengado.

Que por tales motivos no se puede afirmar que en el caso en cuestion se haya impedido el ejercicio de una profesion honesta ni el aprovecharse de sus productos, ni mucho menos que se hubiera forzado á dicho letrado á prestar trabajos personales sin su consentimiento, y por consiguiente que haya habido infraccion de los artículos 4^o y 5^o de la Carta fundamental.

Que el artículo 14 de la misma en la parte que dispone que nadie puede ser juzgado ni sentenciado sino por el Tribunal establecido con anterioridad al hecho, en ningun

sentido es aplicable á la cuestion de si el Tribunal Supremo era ó no competente para conocer bajo el título de "recurso fuerza de grado" del juicio entre la Rosas y Perez.

Que tampoco es aplicable el artículo 17 de la mencionada Constitucion, que previene: que los tribunales estarán siempre expeditos para administrar justicia, á la suspension de todo procedimiento en cuanto á la exaccion de costas, decretada por el Tribunal, pues que tal artículo aun interpretado de la manera mas lata no puede referirse sino á la cesacion en general de las tareas judiciales por determinado tiempo; pero ni remotamente á la suspension motivada de cualquiera resolucion en cada negocio en particular, se decreta: que es de confirmarse y se confirma en todas sus partes la sentencia pronunciada en 2 de Agosto del presente año por el Juez de Distrito de Puebla, que declara: que la Justicia de la Union no ampara ni protege al Lic. Sebastian Villegas contra el Tribunal Supremo del Estado, por haber resuelto en el recurso fuerza de grado interpuesto en el negocio que patrocinó contra el C. Rafael Perez sobre pago de renta y desocupacion de casa, que el Juez de paz solo hiciera efectiva su sentencia en cuanto al pago de costas, conforme á la ley del Estado de 5 de Diciembre de 1870, y que deberá pagar el quejoso la cantidad de cien pesos de multa á que se le condena.

Devuélvanse los autos al Juzgado de su origen, con copia certificada de esta sentencia; publíquese y archívese á su vez el Toca.

Así por unanimidad de votos lo decretaron los CC. Presidente y Ministros que formaron el Tribunal pleno de la Corte Suprema de Justicia de los Estados Unidos Mexicanos, y firmaron.—*José María Iglesias.*—*Pedro Ogazon.*—*Juan J. de la Garza.*—*José María Lozano.*—*José Arteaga.*—*P. Ordaz.*—*M. de Castañeda y Nájera.*—*J. M. del Castillo Velasco.*—*Simón Guzman.*—*M. Zavala.*—*José García Ramirez.*—*Ignacio M. Altamirano.*—*Luis M. Aguilar,* secretario.

Es copia que certifico. México, Octubre 14 de 1873.—*Lic. Enrique Landa*, oficial mayor.

AMPARO

Promovido ante el Juzgado de Distrito de Guanajuato por Trinidad Duarte, contra los procedimientos del Gefe político de Pénjamo, en virtud de los cuales fué juzgado y sentenciado á muerte.

PEDIMENTO DEL C. PROMOTOR FISCAL.

C. Juez de Distrito.

El Promotor fiscal dice: José Trinidad Duarte, solicitó en 28 de Marzo del presente año el amparo de la Justicia Federal contra el proceso que en el año de 1870 le instruyó el Gefe político de Pénjamo, considerándolo comprendido en la ley de 9 de Abril de 1869, que suspendió algunas garantías individuales para los salteadores y plagiarios, en cuyo proceso fué sentenciado á la pena de muerte. La Legislatura del Estado le concedió la gracia de indulto de la pena á que había sido sentenciado, y actualmente extingue en la Penitenciaría de Salamanca la de diez años de presidio. En el escrito de queja no se expresaron las garantías individuales en cuya violación se fundaba el recurso de amparo, siendo preciso requerir al quejoso para que lo hiciera; y en la diligencia practicada con este objeto por el C. Juez de letras de Salamanca, señaló las consignadas en los artículos 13, 16, 20 y 21 de la Constitución federal.

El C. Gefe político de Pénjamo, al rendir el informe de que habla el artículo 9 de la ley de 20 de Enero de 1869, acompañó como justificante una copia del acta criminal instruida contra el quejoso, y de conformidad con dicho artículo se mandó dar traslado al que suscribe, que por estar gravemente enfermo no pudo evacuarlo y la jus-

tificación del Juzgado, por constarle esta imposibilidad, lo hizo constar en otros recursos de amparo. Durante la dilación probatoria no se presentaron ningunas pruebas; y ya en estado de alegar, la esposa del quejoso presentó una información judicial, que el Juzgado mandó que se agregara para los efectos á que hubiere lugar.

El Promotor fiscal, según las constancias de que ha hecho mención, tiene que dar su parecer sobre la existencia de la violación de las garantías individuales que se han invocado.

La ley de 9 de Abril de 1869, en virtud de la cual fué juzgado y sentenciado el quejoso, suspendió en su artículo 1º, exclusivamente para los salteadores y plagiarios, las garantías de que habla la 1ª parte del artículo 13, la 1ª parte del artículo 19 y los artículos 20 y 21 de la Constitución federal; y en su artículo 3º dió facultades á las autoridades políticas de los Distritos, ó Gefes militares de la Federación ó de los Estados, para juzgarlos y sentenciarlos si resultaba probado el delito de plagio ó de asalto, á la pena de muerte.

José Trinidad Duarte, cita además de los artículos á que se refiere esta ley, el 16 de la Constitución; pero como se ha dicho, los Gefes políticos son autoridades competentes para juzgar y sentenciar á los salteadores y plagiarios, sin que pueda decirse lo contrario porque la ley de 9 de Abril 1869 no fué dada observando los trámites que se señalan en el artículo 127 de la misma Constitución, porque no envuelve una adición ó reforma del pacto federal, sino una suspensión de garantías individuales en los términos y en el caso que la dicha Constitución ha previsto en su artículo 27. Se pretende fundar la incompetencia del C. Gefe político de Pénjamo en los artículos 101 y 109, de la Constitución, por no nombrarse en el Estado los Gefes políticos por medio del sufragio popular. Este nombramiento se hace por el Ejecutivo del mismo, que es electo popularmente; no infringiéndose por tan-